

Carlos Salinas de Gortari. Un Presidente que no deja de correr

Trejo-Delarbre, Raúl

Raúl Trejo Delarbre: Sociólogo mexicano. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México. Autor de diversos textos sobre temas sindicales, de comunicación y políticos. Director del Suplemento Política del periódico El Nacional (Ciudad de México).

En la primera mitad de su gobierno, Carlos Salinas de Gortari pudo transitar, de fuertes impugnaciones - resultado de unas discutidas elecciones, en julio de 1988 - a un amplio y documentado consenso por parte de la sociedad mexicana. Sus reformas políticas y económicas han abierto nuevas expectativas, incluso para su propio partido, el PRI, cuyos recientes logros electorales tienen que atribuírsele al Presidente y a programas de beneficio público, como el Nacional de Solidaridad. Carlos Salinas, educado en Harvard, era considerado tecnócrata. Sin embargo, con medidas audaces, pronto demostró una capacidad de ejecución y proposición políticas que le han dotado de un liderazgo original y propio. El gran rezago, sin embargo, sigue siendo la enorme desigualdad que cruza - y escinde - la sociedad mexicana.

Hace poco, en un programa de televisión que fue muy visto en México, la legendaria actriz María Félix se refirió a Carlos Salinas: «este Presidente que tenemos ha demostrado que tiene pantalones». Quizá no hubo, en esa larga transmisión de cinco horas, un aplauso tan largo - había público en el estudio - como el que recibió aquella afirmación de la célebre Doña Bárbara. El elogio, y el aplauso, forman parte del nuevo perfil político que ha tenido el actual Presidente mexicano. Con creciente popularidad, Carlos Salinas protagoniza la peculiar paradoja de estar llevando a cabo un audaz programa de reformas, que no hubieran sido posibles sin la revitalización del presidencialismo en este país, justamente cuando se pensaba que la centralidad de la figura presidencial estaba condenada a disminuir en beneficio de otras presencias sociales.

Con un partido político escindido y atrapado en una compleja estructura corporativa y ante una oposición política reclamante y a menudo desafiante, Carlos Salinas se erigió como el eje de la nueva y en algunos sentidos aún incierta transición mexicana. Su gobierno, que en el último mes de 1991 llegó justamente a la mitad del sexenio para el que fue electo, comenzó con pésimos augurios. En poco tiempo las expectativas de Salinas cambiaron, pero a fuerza de reiteradas sorpresas.

Búsqueda de credibilidad

Era difícil apostar sobre el rumbo de la transición mexicana en 1988, después de las complicadas y discutidas elecciones de julio, cuando una parte muy significativa de la oposición - liderada por el ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas - reclamaba que el triunfo en las urnas había sido para ella y no para Carlos Salinas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Nunca estuvo claro que la oposición de centro-izquierda hubiera ganado los comicios, pero tampoco que el porcentaje adjudicado a Salinas (muy poco más allá del 50%, que de todos modos era la menor proporción obtenida por el legendario PRI en una elección presidencial) hubiera sido tan alto como se dijo. Pronto, el nuevo Presidente desplegó una política, al mismo tiempo, de concertación con otras fuerzas y de medidas drásticas, incluso en contra de inercias y rigideces dentro de los grupos que tradicionalmente habían detentado el poder político en México.

Entre las primeras medidas de Salinas estuvieron el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, acusado entre otros delitos de posesión ilegal de armas y que había sido un auténtico cacique, durante varias décadas, en uno de los sindicatos más poderosos y en una de las ramas fundamentales de la economía. De esa manera se rompía, al menos en algunos de sus nudos hasta entonces más fuertes, la tradicional alianza entre el gobierno y los sindicatos: una colaboración que ha estado definida por el beneficio mutuo, pero que entre otras consecuencias ha tenido la subordinación y desmovilización del sindicalismo mexicano, al mismo tiempo que el enquistamiento de una vieja y tradicional capa de dirigentes. Poco después, en el sindicato más numeroso del país y, según se dice, también de América Latina, el Nacional de Trabajadores de la Educación - que cuenta con aproximadamente un millón 200 mil agremiados - el viejo líder Carlos Jonguitud, senador de la República, fue destituido luego de influyentes manifestaciones de grupos de maestros que peleaban por mejores salarios y por la democratización del SNTE. No puede decirse que Salinas directamente haya buscado la caída de Jonguitud, pero sí que la permitió y, acaso, le dio el último empujón: el dirigente defenestrado

anunció su renuncia al grupo que hasta entonces había sido hegemónico en el sindicato, después de acudir, presuroso, a las oficinas del Presidente de la República.

El restablecimiento, o si se quiere la reafirmación de un Estado de derecho, en donde las normas tengan credibilidad, ha sido una constante - pero no siempre exitosa - búsqueda del gobierno de Salinas. En México, igual que en otras áreas de Latinoamérica, la corrupción de las burocracias administrativas y de las corporaciones policíacas ha llegado a crear un síndrome de desconfianza, y de complicidad a veces, por parte de la sociedad. Quizá por ello, Salinas inició su gobierno ajustando cuentas con grupos que le eran adversos, pero también propiciando la aplicación de la ley en algunos casos que, si bien no generalizados, al menos resultaban ejemplares ante los ciudadanos. Pocas semanas después de haber comenzado su gobierno, fue encarcelado el empresario Eduardo Legorreta - acusado de malos manejos en la operación de una casa de bolsa - que significativamente, es hermano de quien entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la principal coalición patronal en el país. En junio de 1989 fue encarcelado José Antonio Zorrilla Pérez, acusado como autor intelectual del asesinato, cinco años antes, del periodista Manuel Buendía - sin duda, el columnista mexicano más influyente en los últimos tiempos -; Zorrilla había sido titular de la Dirección Federal de Seguridad que, para explicarlo de alguna manera, puede ser calificada como la policía política en este país. En varias ocasiones del gobierno salinista han sido detenidos conocidos y hasta entonces impunes narcotraficantes, entre otros Miguel Angel Félix Gallardo - el más importante capo del tráfico de drogas en México -, en abril de 1989.

Que la ley se cumpla, podría parecer irrelevante en una democracia moderna - aunque no hay nación en donde dejen de existir tráfico de influencias y presiones políticas de lo más variadas - pero pareciera fundamental en la solidificación de una cultura política en donde la credibilidad mutua sea regla, y no excepción, en el trato entre el Gobierno y los sectores de la sociedad. Y entre éstos últimos también. No puede asegurarse que Salinas haya consolidado, al llegar a la mitad de su gobierno, una nueva moral social, porque no en todos los niveles de la administración pública existe una nueva moral de servicio, pero sí puede constatar que hay cambios en esa dirección. Antes eran prácticamente intocables los dirigentes sindicales, los jefes policíacos y militares o los padrinos patronales. Ahora, al menos en México existe la sensación de que no hay impunidades permanentes, y ése ya parece constituir algún avance. En julio de 1990 fue creada la comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo designado por el Presidente de la República para atender denuncias sobre violaciones en ese orden, por parte de autoridades o de empleados públicos. En su primer año y medio de actividad, la comisión - presidi-

da por Jorge Carpizo, ex-rector de la Universidad Nacional - resolvió sobre unas 3.500 quejas que van desde negligencias de algún funcionario en el cumplimiento de trámites administrativos, hasta abusos, que han llegado a la tortura y el asesinato, por parte de miembros de corporaciones policíacas. La comisión ha ganado una enorme presencia y credibilidad sociales y desde 1992, ya no dependerá directamente del Poder Ejecutivo y será designada por el Legislativo.

Elecciones, legalidad, discrecionalidad

Durante la búsqueda, no siempre lograda pero con avances, en el cumplimiento de la legalidad, el área más delicada ha sido la electoral. Precisamente, las mayores impugnaciones a Salinas surgieron de los comicios de julio de 1988. Por ello, una de las primeras medidas del gobierno fue la convocatoria a los partidos políticos para diseñar una nueva legislación para las elecciones federales. Después de arduas y no siempre fructíferas discusiones, en julio de 1990 - con la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado poco antes por Cuauhtémoc Cárdenas - el resto de los partidos aprobó en la Cámara de Diputados un nuevo Código Federal Electoral, que adjudica a un nuevo organismo, que no depende directamente del Gobierno, la organización de las elecciones. El Instituto Federal Electoral tuvo su primera prueba en los comicios nacionales de agosto de 1991 en los que, sensiblemente, se registraron menos impugnaciones que tres años antes.

Previamente, en varias ocasiones durante el primer trienio de Carlos Salinas, el grupo en el gobierno tuvo que abdicar de la práctica del carro completo, que es como se ha denominado a la costumbre del PRI para hacerse, por las buenas o por las malas, de todos los cargos sujetos a elección popular. Así, por primera vez en la historia mexicana reciente, en julio de 1989 ese partido reconoció el triunfo de un candidato de la oposición en un estado de la República.

En Baja California, estratégica entidad que colinda al noroeste con los Estados Unidos Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional (PAN) - organismo de la centro-derecha con medio siglo de experiencia electoral - fue el primer gobernador no miembro del PRI cuya elección ha sido reconocida después de la Revolución de la segunda década del siglo. Más adelante la oposición, especialmente del propio PAN pero eventualmente también del PRD, ha conquistado otras posiciones de elección, especialmente en influentes capitales de estados como Mérida (la capital de Yucatán) o San Luis Potosí (capital de la entidad del mismo nombre).

Después de las elecciones de agosto de 1991, que además de federales fueron locales en algunas entidades, fue reconocido, pero muy discutido, el triunfo del PRI para las gubernaturas de Guanajuato y de San Luis Potosí, en donde hay fuerte presencia de Acción Nacional y de otros grupos. Todas las evidencias disponibles indicaban que, aun cuando había trazos de irregularidades y trampas, descontándolas, el PRI de cualquier manera hubiera ganado los comicios en esos dos estados. Sin embargo, la protesta pública, dentro y fuera de ellos, fue tan amplia que Salinas decidió remover a los gobernadores priístas - que ya habían tomado posesión de sus cargos - en aras de apaciguar el descontento opositor. En Guanajuato, fue designado provisionalmente un gobernador miembro del PAN. En San Luis, quedó otro priísta. Allí no puede considerarse que haya existido cumplimiento estricto de la ley, sino medidas discrecionales en aras de la negociación y la conciliación con otros sectores del sistema político, incluso por encima de los intereses del propio PRI.

Posiblemente esa actitud la pudo desplegar Salinas en vista del consenso que a su partido, pero especialmente a él mismo, le conferían las elecciones federales de agosto de 1991. Más allá incluso de los cálculos que había por parte del partido en el gobierno y sorprendiendo a todos los analistas, en esa ocasión se registró una fuerte participación ciudadana: más del 65% de los inscritos en el padrón electoral cantidad alta sobre todo si se considera que se trataba de comicios intermedios, es decir, a la mitad de una gestión presidencial, para renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Y la mayor sorpresa fue la votación en favor del PRI, que se esperaba mayoritaria pero no tanto: ese partido logró el 61,4% de la votación nacional - obteniendo así 320 de los 500 diputados federales -. Le siguieron el PAN, con algo menos del 18% y el PRD, con poco más del 8%. El resto, aproximadamente 8% también, fue para otros tres partidos.

De esta manera, al menos en las preferencias de «medio tiempo», es decir, al cumplirse la primera mitad del gobierno, los votantes mexicanos parecen confirmar el establecimiento de un sistema tri-partidista. En el centro se encontraría un PRI fortalecido por las acciones de Salinas, pero no necesariamente sólido para nuevas aventuras y necesitado, como sus propios dirigentes reconocen, de fuertes cambios de estructura y de comportamiento. A la izquierda, aunque con prácticas del priísmo, de donde vienen varios de sus principales dirigentes, pero también alimentado con miembros de la antigua vertiente socialista y comunista, está el PRD, que se ha empeñado en mantener claras distancias respecto de Salinas y que todavía varios años después de la elección de 1988 seguía considerándolo como un Presidente «ilegítimo». En el flanco derecho, cosechando una tenaz labor de medio siglo y sin

rehusarse a alianzas coyunturales con el gobierno, aunque diferenciándose constantemente de él, se encuentra el PAN, con presencia sobre todo en los principales núcleos urbanos. No obstante, incluso en reductos que en elecciones anteriores habían sido de la oposición, el PRI logró una - otra vez - sorprendente mayoría. En Ciudad de México, en donde como en todas las grandes urbes se concentra la disidencia más constante, el PRI ganó aproximadamente el 44% de los votos - más que ningún otro partido y -, con ellos, todas las posiciones de mayoría relativa para la Asamblea de Representantes, que es el órgano de deliberación pública que existe para esta metrópoli.

De Harvard a las plazas públicas

Esos triunfos el PRI no los hubiera conseguido sin Carlos Salinas. Más que un partido para apoyar al Presidente, el PRI se ha convertido en un partido dependiente del poder presidencial. Esa no es novedad en la política mexicana, donde el titular del Poder Ejecutivo siempre ha sido el auténtico líder del partido gobernante. Lo inédito es que como nunca antes el PRI, sobre todo en 1988, parecía haber agotado sus fuentes de consenso social y tuvo que rehabilitarlas no sólo gracias a un nuevo activismo de sus militantes, sino respaldándose en el activismo del Presidente de la República.

A todos, al menos a los muchos que no lo conocían, sorprendió esa capacidad de Carlos Salinas para hacer política y sobre todo política de masas, porque hasta su designación como candidato presidencial sólo se le conocían aptitudes para el trabajo de gabinete. Formaba parte de los tecnócratas, pero no de los políticos, se decía para enfatizar los principales rasgos de su experiencia profesional. Y en efecto, Salinas antes de competir por la Presidencia de la República no había sido candidato a ningún cargo de elección popular y se había desempeñado exclusivamente en dependencias del gobierno relacionadas con la política económica.

Pero tenía también otros antecedentes. Salinas creció, y se formó, en el medio político. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue secretario de Industria y Comercio cuando el ahora Presidente - que nació en abril de 1948 - era quinceañero. Aunque no participó directamente en él, a Salinas le tocó presenciar el movimiento estudiantil de 1968, que terminaría con el asesinato de centenares de jóvenes el 2 de octubre en Tlatelolco: era, entonces, estudiante en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Allí hizo su tesis de licenciatura titulada «Agricultura, industrialización y empleo: el caso de México. Un enfoque interdisciplinario», que ganó mención honorífica en un Premio Anual de Economía. Más tarde, sobre el mismo tema, escri-

bió su tesis para el doctorado que recibiría en Economía Política y Gobierno, en la Universidad de Harvard, en 1978.

Precisamente como parte del trabajo de campo que realizó, Salinas se ligó directamente a los problemas de diversos núcleos de agricultores mexicanos y, de alguna manera, se identificó con el legendario Emiliano Zapata, el caudillo que, cuando la Revolución Mexicana, encabezó a los campesinos en el estado de Morelos: tanto es así, que uno de sus tres hijos se llama Carlos Emiliano. Significativamente una de las reformas principales - por cierto álgidamente discutida - que Salinas propuso justo al cumplirse la mitad de su gobierno ha tenido el propósito de modernizar el campo mexicano.

Posiblemente esa experiencia, aunque también los aprendizajes forzosos de la intensa campaña electoral que sostuvo para ganar la Presidencia, le permitieron a Salinas adquirir un tono de franqueza y claridad muy alejado de las sofisticaciones harvardianas, con el que se dirige a los mexicanos que lo escuchan en sus frecuentes alocuciones públicas.

Durante todo su gobierno Salinas ha acostumbrado - salvo cuando se encuentra fuera del país - hacer giras cada semana a diferentes sitios de la República. El consenso que así ha despertado, anunciando medidas específicas y alejándose de la retórica vacía que en buena medida había definido a la clase política mexicana, le ha valido reconocimientos que pueden constatarse en los mítines. No puede decirse, al menos en términos clásicos, que Salinas sea un mandatario carismático, si uno se atiene a su personalidad o sus discursos. Pero cuando se advierte la reacción de la gente, cuando está delante de sus gobernados, puede pensarse que allí hay un fenómeno todavía por explicarse pero de indudable influencia en la formación de nuevas redes y conductas políticas en el México de hoy: el lenguaje de Salinas no forma parte del viejo populismo, pero tiene motivaciones populares al mismo tiempo que, paradójicamente, su política económica no siempre está intencionadamente dirigida a favorecer el bienestar de las mayorías. Salinas tiene habilidades para hablar convincentemente con un campesino de la sierra de Puebla - una de las zonas más empobrecidas de México - y para discutir con los hombres más poderosos de la banca internacional. De allí su presencia en distintos ámbitos. De allí, también, el éxito hasta ahora constatable - faltará ver si es perdurable - de los equilibrios que ha logrado construir.

De la deuda al libre comercio

En el plano económico, al comienzo de su gobierno Salinas puso como meta principal la renegociación de la deuda, en torno a la cual convocó a la adhesión - en una suerte de enfática tregua social - de los mexicanos. Ese fue el primer logro espectacular de Salinas ante la opinión mundial. Después de tortuosas negociaciones con la banca internacional, el 23 de julio de 1989 el gobierno mexicano acordó una disminución - que no sería protocolizada hasta el 4 de febrero siguiente - del 35% sobre la deuda pública. Sumadas diversas reducciones, en términos llanos se logró rebajar la deuda mexicana de 107 mil a 80 mil millones de dólares.

La otra apuesta de Carlos Salinas ha sido la búsqueda de un acuerdo comercial con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En realidad, al comienzo de su gobierno el Presidente mexicano desdeñaba la posibilidad de buscar un tratado así, pero poco a poco la realidad de una inversión estadounidense que de cualquier manera crece - sin reglas suficientes - en México, así como la necesidad de empujar la economía con recursos de fuera convenció a Salinas y a su grupo de la pertinencia de buscar un acuerdo. Con el Tratado de Libre Comercio, la de Norteamérica sería la zona de esa índole más grande en el mundo, incluso con una capacidad de intercambio potencialmente mayor que la de los países europeos, en trance de integración económica.

Pero no por mirar al Norte, el gobierno de México podría darse el lujo de cerrar los ojos hacia el Sur. Constantemente, Salinas ha emprendido viajes y acuerdos con otros mandatarios del continente, de la misma forma que ha sostenido una activa diplomacia respecto de Europa y la Cuenca del Pacífico. Tradicionalmente, para la política exterior mexicana ha constituido un asidero ineludible la posibilidad de negociar con otras zonas del mundo, como una manera de atenuar - o en todo caso de negociar en otras condiciones - los acuerdos, siempre inevitables, con los Estados Unidos. Alguna vez se dijo que la fatalidad para México consiste en que estamos «tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». Ahora, para disminuir o aprovechar ese destino, podría decirse que se busca estar cerca del mundo, como una manera de ser, de manera distinta, vecinos de los Estados Unidos.

Economía (y salarios) bajo control

Pero la recuperación económica que permitiría la renegociación de la deuda, primero, y el acuerdo comercial con Norteamérica, después, ha sido más proyecto que realidad. Los mexicanos han otorgado una suerte de voto de confianza a Carlos Sa-

linas, y el reto para el gobierno es traducir en realizaciones para la sociedad - y no sólo para sus cúpulas económicas - las promesas que se le hacen. El Pacto de Estabilidad que se había forjado en el gobierno anterior, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, fue ratificado en sucesivas ocasiones, siempre para contener alzas de precios y, sobre todo, demandas salariales. Hemos tenido, así, una economía contrahecha por marcos rígidos - más rigurosos con los asalariados que con los patrones - pero que ha resultado eficaz para detener la escalada inflacionaria que, en otras naciones del continente, ha resultado catastrófica.

En 1988, ya con Pacto de Estabilidad y aún antes del gobierno salinista, México había reducido su inflación al 58%. Para 1990 ésta disminuyó a la mitad casi (29,9%) y, en 1991, habría sido de aproximadamente del 18% - el gobierno espera que en 1992 sea menor del diez por ciento, aunque hay numerosos factores que impiden hacer un pronóstico del todo claro -. En contraparte y como resultado de la misma contención de la economía, los salarios, en términos generales, permanecieron estancados: a fines de 1991, los trabajadores mexicanos aún no recuperaban los niveles de ingreso que tenían en 1980.

El salario mínimo - equivalente a poco más de cuatro dólares diarios - ha seguido siendo insuficiente para remunerar los gastos más elementales de una familia y en parte por ello, crece el sector informal de la economía. Al mismo tiempo, cabe señalar que cada vez han sido menos los trabajadores mexicanos que dependen del salario mínimo (menos de la décima parte de una población activa de aproximadamente 22 millones de trabajadores) y que durante los años recientes, la desocupación ha disminuido un poco: de una tasa de desempleo abierto cercana al 5% a fines de 1988, tres años después se había transitado a una algo menor al 3%.

Quienes trabajan en el sector industrial, e incluso en áreas de los servicios, han tenido una situación salarial que, si bien no ha mejorado sustancialmente, tampoco ha empeorado - como parecía ocurrir algunos años antes del gobierno de Salinas -. Pero quienes no tienen empleo, o no lo tienen de manera fija, así como los muchos mexicanos que se mantienen en áreas rurales o marginadas, han seguido experimentando carencias que, sumadas a las que ya padecían, los colocan en una situación de miseria.

Difícil combate a la pobreza

En México hay cerca de 41 millones de personas en algún grado de pobreza, es decir, gente cuyas necesidades básicas - en materia de alimentación, salud, educación

o vivienda - no se encuentran satisfechas. De todos ellos, 17 millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Se trata de mexicanos que suelen estar enfermos, analfabetos, sin drenaje, energía eléctrica o agua potable, desnutridos y con posibilidades de mortalidad mucho mayores a las del resto de sus compatriotas. No todos padecen todas esas carencias, pero sí son frecuentes entre ellos.

En este país, según estimaciones del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, cerca de 39 millones de personas (27,5 en el campo y el resto en ciudades) no comen lo suficiente, de acuerdo con los índices nutricionales más elementales. La desigualdad puede apreciarse mejor si se advierte que el 10% de la población mexicana con mayores ingresos consume el 21% de los alimentos, en tanto que el 30% más pobre se queda nada más con el 13% de la comida disponible. Las carencias son mayores en las zonas campesinas: allí, solamente uno de cada cinco niños tiene peso y estatura considerados como normales. Cien mil niños - de dos millones que nacen cada año - mueren por causas relacionadas con una insuficiente nutrición. Esto significa que, prácticamente, cada cinco minutos muere en México un niño que pudo haber vivido si hubiera comido lo suficiente. Hay quienes estiman que un millón de niños más crecerá con insuficiencias físicas por esa misma causa.

Para afrontar - o para paliar, aunque sea en parte - ese torrente de carencias, Carlos Salinas creó el Programa Nacional de Solidaridad, que combina la exhortación para que la gente se involucre en tareas colectivas, con una significativa asignación de recursos del presupuesto federal, para atender la satisfacción de requerimientos básicos. El Pronasol, o Solidaridad, como simplemente se le llama al Programa, ha sido ampliamente publicitado en los medios de difusión electrónicos y sobre todo, ha sido el instrumento principal de la política de masas de Carlos Salinas. No puede decirse que sea el Programa de un solo hombre, puesto que está articulado por una amplia red de organizaciones de base, pero sin duda no existiría sin el respaldo explícito del Presidente de la República.

A través de Solidaridad, millares de comunidades mexicanas reciben servicios que antes no tenían - agua, drenaje, luz eléctrica, atención médica - sin tener que cursar por los a menudo fatigosos vericuetos burocráticos que sigue teniendo la administración pública.

A fines de 1991 existían casi 65.000 «Comités de Solidaridad», integrados lo mismo por campesinos que por amas de casa o colonos de barrios populares, encargados de la gestión de esos recursos. Las asignaciones destinadas en 1992 para el Progra-

ma Nacional de Solidaridad ascenderían a 2.200 millones de dólares - más o menos el 8% de todo el presupuesto federal -.

Solidaridad obedece a necesidades de consenso del gobierno pero, también, a la existencia real de enormes desigualdades sociales. Nadie ignora que hay dos, o quizá muchos méxicos. Uno es el de la modernidad, el de las zonas urbanas en donde se concentra una enorme capacidad de consumo y cuyos beneficiarios están entusiasmados con las previsiones del nuevo auge económico.

Durante los años recientes han aumentado las posibilidades de los mexicanos de situación financiera más acomodada: centenares de familias viajan varias veces al año, por ejemplo, para esquiar en las colinas de Vail, en Colorado; Ciudad de México es posiblemente la región del mundo en donde más han proliferado los teléfonos celulares y en la próspera capital de Monterrey, en Nuevo León, se ha encontrado la zona, también en todo el mundo, donde se ha concentrado el mayor número de antenas parabólicas para recibir señales televisivas de satélite. Ya hay numerosos compradores para los automóviles Mercedes Benz que posiblemente se fabriquen aquí, íntegramente, en la primera ocasión que, en la historia de esa firma, así ocurra fuera de Alemania.

En este país, en los últimos años, los que ya tenían han podido tener más. Ese es el México de la abundancia. El otro, es el México - con numerosas y también desiguales regiones - de la pobreza, que a veces llega a ser indigencia extrema.

Clientelismo, consensos, esperanzas

La existencia de Solidaridad es una de las causas por las que el Estado mexicano, más allá de las tendencias individualistas o neoliberales que campean en el mundo - y en numerosas decisiones del gobierno en este país - sigue desplegando una política social que tiene que mostrar realizaciones, además de proyectos. La sociedad exige acciones específicas y no es gratuito que en las colonias populares, o en las zonas agrarias, las peticiones ante los candidatos y partidos políticos sean muy claras: escuelas, agua potable, vivienda, servicios asistenciales, etcétera. Hay medidas clientelares, porque hay clientelas. Aunque no se lo propusiera el Programa Nacional de Solidaridad tendría connotaciones políticas, aunque también es evidente que el gobierno sí ha buscado (y obtenido, con notorio éxito) réditos de esa índole. Así, los resultados electorales de agosto de 1991, notablemente favorables a Salinas y su régimen, no podrían explicarse sin el despliegue de recursos a través de Solidaridad.

Una encuesta realizada en septiembre de 1991 por la empresa Gallup de México mostró que el 85% de los mexicanos considera que está de acuerdo con la gestión de Carlos Salinas. En esa misma muestra, levantada entre tres mil personas en 67 ciudades, resultó que el 56% de los mexicanos considera que hoy su situación es «mejor» o «mucho mejor» que en 1988, y el 68% espera que su situación personal mejore en el próximo trienio.

Los reconocimientos no sólo se manifiestan dentro del país. Fuera, la prensa estadounidense y europea - y en alguna medida también la del resto de América Latina - tiende a exaltar, a veces con notable énfasis, las reformas salinistas. Por citar un solo ejemplo, el columnista para Latinoamérica del habitualmente rígido *The Wall Street Journal*, en una actitud de perdonavidas pero también de aplauso, escribía a comienzos de diciembre de 1991 que «hay confianza y mucho más. Hasta los críticos más severos de México ya no pueden negar el éxito de las políticas macroeconómicas del presidente Carlos Salinas».

El gobierno mexicano es muy sensible a los comentarios de la prensa extranjera - inclusive, Salinas suele estar muy dispuesto a conceder entrevistas a periódicos y medios electrónicos de otros sitios, pero pocas veces lo hace con medios de información mexicanos -. Al mismo tiempo, ha mostrado una amplia capacidad de interlocución y convocatoria respecto de los gobiernos de otros países. Salinas, en la primera mitad de su mandato, viajó por varios continentes y se entrevistó con los gobernantes más influyentes del mundo. No sólo se ha reunido en varias ocasiones con George Bush, sino que buscó a Mijail Gorbachov en el Kremlin, a Felipe González en Madrid, a Helmut Kohl en Bonn y a Juan Pablo II en el Vaticano, entre muchos otros. En julio de 1991, el Presidente mexicano reunió en Guadalajara a los jefes de Estado y gobierno de una veintena de naciones en Iberoamérica y logró, entre otras cosas, que Fidel Castro estuviera sentado en la misma mesa que algunos de sus impugnadores más intransigentes.

Otras circunstancias han coincidido para que, junto con las reformas de Salinas, México fuera mencionado recientemente en diversos sitios. Octavio Paz, nuestro enorme poeta, obtuvo en 1990 el Premio Nobel de Literatura y poco después Lupita Jones, nuestra hermosa compatriota, ganó el certamen Miss Universo. (Se dijo entonces, con algo de maledicencia y con esa conducta que tiende a politizarlo todo, que la guapa muchacha de Baja California era «miss Tratado de Libre Comercio». En realidad, creemos, tiene méritos suficientes para, por ella misma, haber ganado el concurso).

Acaso acontecimientos como esos estimulen el afán de competencia de los mexicanos ante novedades como el acuerdo comercial con Norteamérica, pero también ante los compromisos mercantiles que el país ha establecido con otras naciones del continente. Carlos Salinas mismo desde joven tiene espíritu competitivo: en 1971 formó parte del equipo ecuestre mexicano que ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Todavía ahora, se dice, casi todos los días Salinas corre él mismo varios kilómetros y cada año participa en un maratón de Agualeguas, un pequeño poblado del norteño Nuevo León, en donde suele pasar sus vacaciones.

Salinas, así, sigue corriendo. No puede decirse que el sistema político avance tan rápido como su Presidente. Tampoco puede asegurarse que los mexicanos estén dispuestos todo el tiempo a seguirle el ritmo, al menos si las promesas de cambio que el actual Gobierno ha presentado no se traducen en nuevas realidades para mejorar la vida de las mayorías. Autoridad, no falta. Pero tampoco basta.

No es suficiente que, como destaca la renombrada María Félix, contemos con un Presidente que «tiene pantalones». Salinas además tiene proyecto, que ha significado reformas audaces en la economía y en la política pero que sigue teniendo como telón de fondo - y a veces como escenario que domina o limita cualquier cambio - la desigualdad social que persiste en el país.

Justo cuando el sistema político mexicano entró en una fase de renovación, la gestión de Carlos Salinas ha reforzado el presidencialismo: la autoridad, y no necesariamente la sociedad, como fuente de transformaciones. Esa sociedad manifiesta confianza en su Presidente. Pero la confianza no sólo se nutre de promesas. Ese es el reto de Carlos Salinas. Esa es la dificultad mayor en la apuesta de quienes lo han respaldado.